

## La Ley de la Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid ★★

Sumario: I. INTRODUCCIÓN.—II. SUS CONTENIDOS.—2.1. Del objeto de la Ley.—2.2. Las partes en la mediación.—2.3. El mediador. La formación de los mediadores.—2.3.1. El mediador.—2.3.2. La formación de los mediadores.—2.4. El Registro de Mediadores Familiares y La Comisión Autonómica de Mediación Familiar.—III. LA APLICACIÓN DE LA LEY.—3.1. La cuestión territorial.—3.2. La promoción de la mediación familiar.—3.3. El procedimiento de la mediación familiar.—3.4. Infracciones y sanciones.—IV. VALORACIÓN FINAL.

### I. INTRODUCCIÓN

La Asamblea de Madrid ha dispuesto la entrada en vigor de la Ley 1/2007, de 21 de febrero, relativa a la Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid al día siguiente de su publicación en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*<sup>1</sup>. Esa inmediatez en la puesta en valor de sus contenidos supone que se dan unas circunstancias que aconsejan tal premura. Debe señalarse, en este orden de cuestiones, que cuando entró en vigor la primera ley de mediación familiar de una Comunidad Autónoma de España —la de Cataluña— se reguló al respecto, un plazo de nueve meses.

Y es que esta nueva ley madrileña ha de contextualizarse, en el conjunto de la legislación de carácter autonómico, como la octava que se presenta sobre mediación Familiar. Tras la de Cataluña<sup>2</sup>, acordaron sus marcos legales al respecto, los parlamentos de Galicia<sup>3</sup> y Comunidad Valen-

---

★ Becaria Predoctoral. Universidad de Santiago de Compostela.

★★ Con el apoyo de la Dirección General de Ordenación y Calidad del Sistema Universitario de Galicia, de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria-Xunta de Galicia y del Fondo Social Europeo. Universidad de Santiago de Compostela.

<sup>1</sup> *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 54, de 5 de marzo de 2007, pp. 3 y ss.

<sup>2</sup> Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación Familiar de Cataluña, *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 3355, de 26 de marzo de 2001, pp. 4380 y ss.

<sup>3</sup> Ley 4/2001, de 31 de mayo, de Mediación Familiar, *Diario Oficial de Galicia*, núm. 117, de 18 de junio de 2001, pp. 8113 y ss.

ciana<sup>4</sup> —las tres en el año 2001—. Después lo harían Canarias (2003<sup>5</sup>, con modificaciones en el 2005<sup>6</sup>) y Castilla-La Mancha (2005)<sup>7</sup>, y en el 2006, Castilla y León<sup>8</sup> e Islas Baleares<sup>9</sup>.

El Principado de Asturias, con posterioridad a esta ley de la Comunidad de Madrid, ha aprobado La Ley 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación Familiar<sup>10</sup>. El País Vasco cuenta ya con proyecto de ley sobre esta materia<sup>11</sup> y está previsto, asimismo, el de Andalucía<sup>12</sup>.

En todo caso esta legislación autonómica está concretándose a partir de lo que se dispone en los respectivos marcos estatutarios en los que, de forma generalizada, se asumen competencias en una materia que el artículo 39 de la Constitución Española de 1978 señala obligaciones a los poderes públicos dado que ha de procurarse la protección social, económica y jurídica de la familia. El que, por otra parte, el mismo texto constitucional, en su artículo 148.20, posibilite que las Comunidades Autónomas asuman competencias en este sentido otorga el camino que explica el desarrollo de este conjunto de leyes que, de una manera general —y desde sus respectivas exposiciones de motivos—, se ponen en relación con lo que aporta la Recomendación de 21 de enero de 1998, del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

La contemplación de la Mediación Familiar<sup>13</sup>, a nivel de un texto legal que se refiera específicamente a esta temática, no ha sido objeto de tratamiento para el conjunto del Estado si bien se tiene en cuenta la posibilidad de su ejercicio, de una manera singular, en la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio por la que se introducen, en el artículo 770 de la Ley de enjuiciamiento civil, una nueva regla 7.<sup>a</sup> por la que se señala que las partes pue-

<sup>4</sup> Ley 7/2001, de 26 de noviembre, de Mediación Familiar, *Diario Oficial de la Generalitat Valenciana*, núm. 4138, de 29 de noviembre de 2001, pp. 25105 y ss.

<sup>5</sup> Ley 15/2003, de 8 de abril de 2003, de Mediación Familiar, *Boletín Oficial de Canarias*, núm. 85, de 6 de mayo de 2003, pp. 7136 y ss.

<sup>6</sup> Ley 3/2005, de 23 de junio, de Mediación Familiar, *Boletín Oficial de Canarias*, núm. 130, de 5 de julio de 2005, pp. 12259 y ss.

<sup>7</sup> Ley 4/2005, de 24 de mayo, de Mediación Familiar, *Diario Oficial de Castilla-La Mancha*, núm. 111, de 2 de junio de 2005, pp. 115 y ss.

<sup>8</sup> Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León, *Boletín Oficial de Castilla y León*, núm. 85, de 4 de mayo de 2006, pp. 8297 y ss.

<sup>9</sup> Ley 18/2006, de 22 de noviembre, de Mediación Familiar, *Boletín Oficial de las Islas Baleares*, de 30 de noviembre de 2006, pp. 32 y ss.

<sup>10</sup> Ley 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación Familiar, *Boletín Oficial del Principado de Asturias*, núm. 81, 9 de abril de 2007, pp. 6270 y ss.

<sup>11</sup> Proyecto de Ley de Mediación Familiar, *Boletín Oficial del País Vasco*, núm. 102, de 28 de mayo de 2007, pp. 16456 y ss.

<sup>12</sup> [http://andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Secciones/Portavoz/Secciones/AJ-VerImagen\\_Portavoz-00/0,20912,15436,00.html](http://andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Secciones/Portavoz/Secciones/AJ-VerImagen_Portavoz-00/0,20912,15436,00.html).

<sup>13</sup> Los estudios monográficos sobre mediación familiar en España cuentan, últimamente, entre otras muchas referencias de interés, con las siguientes: M. J. Ruiz Marín (dir.), *Mediación y protección de menores en Derecho de Familia*, Cuadernos de Derecho Judicial, t.V, 2005, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005; T. Bernal Samper, *La Mediación. Una solución a los conflictos de ruptura de pareja*, Colex, Madrid, 2006; L. García Villaluga, *Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de Familia*, Reus, Madrid, 2006, y H. Soletto Muñoz y M. Otero Parga (coords.), *Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una necesidad emergente*, Tecnos, Madrid, 2007.

den solicitar de común acuerdo la suspensión del proceso para someterse a la mediación familiar; y en el artículo 777, un nuevo apartado —el 2— en el que se contempla, en los procesos de separación o divorcio, que, entre los documentos a presentar, se considera que cabe incluir «en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar...».

En la Disposición Final 3.<sup>a</sup> de la mencionada Ley 15/2005 se dispone que «El Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados por las Comunidades Autónomas».

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, la propia existencia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Dirección General de Familia y de la Ley 11/2003, de 27 de marzo de Servicios Sociales —que contempla diversas medidas en apoyo de la familiar— suponen un adecuado marco para la promoción de la Mediación Familiar, por otra parte valorada ya en el Plan de apoyo a la familia 2005-2008, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el 1 de diciembre de 2005. Tales cuestiones se señalan en la exposición de motivos que, a modo de preámbulo, principia el texto legal aquí comentado y que se estructura en 29 artículos que se reparten en cinco títulos —uno, preliminar; y cuatro más, el último de los cuales se divide en tres capítulos— y tres disposiciones: una adicional y dos finales.

## II. SUS CONTENIDOS

### 2.1. Del objeto de la Ley

La práctica de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Madrid tiene por finalidad, «prevenir y minimizar los conflictos intrafamiliares». Se busca, además, «evitar los procedimientos judiciales de carácter contencioso, poner fin a los ya iniciados o reducir sus consecuencias negativas», lo que sitúa a la mediación como una alternativa al litigio, valiendo, incluso, para «facilitar a las partes... el cumplimiento de sentencias judiciales que afecten a las relaciones familiares» (art. 3). Este modo de considerar la finalidad de la mediación familiar trata la cuestión de un modo amplio, dejando de considerar cuestiones que cabe entender como más concretas.

Se puede señalar que el modo de asumir la aplicación de la mediación familiar en los últimos años ha ido ampliando sus horizontes. Concretamente, en la primera ley acordada al respecto —la catalana—, se señala que «la mediación parcial se limita a tratar algunas de las materias relativas a la custodia de los hijos, al ejercicio de la potestad del padre y de la madre, al régimen de visitas, al uso de la vivienda familiar o a las económicas. Si abarca todas las materias mencionadas se trata de mediación total» (art. 10).

Por otra parte, en la Ley gallega se procura, concretamente, «regular, de común acuerdo, los efectos de la separación, divorcio o nulidad de matrimonio...» (art. 3). En tanto, en la ley valenciana, se alude al cuarto grado de consanguinidad o afinidad a la hora de delimitar hasta dónde deben de ser mediados los conflictos de índole familiar [art. 3.a)].

En este mismo extremo la Ley canaria entiende «cualquier conflicto familiar siempre que verse sobre materias respecto de las cuales el ordenamiento jurídico vigente reconozca a los interesados la libre disponibilidad o, en su caso, la posibilidad de ser homologados judicialmente...»; se incluye ahora, entre la casuística enumerada, la posible conflictividad entre abuelos y nietos, desde el contexto de la ley correspondiente (art. 2 Ley 3/2005).

Tanto en la Ley de Castilla-La Mancha (art. 3), como en la de Castilla y León (art. 3) se opta por una amplia tipificación que llega en el caso castellano-manchego a especificaciones tales como entender como susceptibles de mediación «las medidas personales y patrimoniales derivadas de la nulidad civil del matrimonio o del reconocimiento civil de una sentencia eclesiástica de nulidad o de una decisión pontificia de matrimonio rato y no consumado» [art. 3.1.b)].

Resulta especialmente aleccionador el marco que la correspondiente Ley de las Islas Baleares le otorga a la mediación familiar, dado que exige que las cuestiones sometidas a la mediación «... deben referirse siempre y necesariamente a materias de derecho civil de familia que sean disponibles por las partes de acuerdo con este derecho y sean susceptibles de ser planteadas judicialmente» (art. 8.2).

Es evidente que el sucesivo posicionamiento de los parlamentos autonómicos con respecto a la finalidad de la mediación discurre de una forma muy concreta, al principio, para, después, ir procurando incorporar una amplia casuística. La ley balear define lo que pudiera valorarse como una manera amplia de entender la aplicación de un marco legal de estas características, línea en la que se encuadra también la norma madrileña.

En la Comunidad Autónoma de Madrid se alude —a la hora de disponer de qué modo se ha de plantear la mediación familiar— a lo que se entiende como unos principios que arrancan de la Recomendación europea del 98 (art. 4). Dichos principios están presentes, de un modo más o menos nítido, en las normas autonómicas de Cataluña, Galicia y Valencia, citándose de una manera ya ordenada en Canarias, algo que asumirán, con formalizaciones diferentes, Castilla-La Mancha, Castilla y León e Islas Baleares.

Debe tenerse en cuenta —en lo que se refiere a esta vinculación expresa a los citados principios de la mediación familiar— que ésta es una cuestión especialmente considerada, como anteriormente se apuntaba, en la Disposición Final 3.<sup>a</sup> de la Ley 15/2005, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio, al señalar las bases en que ha de sustentarse el proyecto de ley de mediación familiar que el Gobierno de España ha de remitir a las Cortes.

## 2.2. Las partes en la mediación

La Ley madrileña valora sucesivamente, en el título que le dedica a las partes de la mediación, sus posibles sujetos (art. 8), así como los derechos (art. 9) y los deberes de las partes (art. 10).

Ha sido la Ley canaria la primera en considerar este tipo de cuestiones de forma específica refiriéndose, únicamente, a los deberes de las partes en litigio (art. 9), en tanto que el marco legal aprobado en Castilla y León trata ya, de forma diferenciada, de los derechos (art. 6) y deberes de las partes (art. 7).

Un caso bien diferente, en la consideración de quienes son partes, lo supone la Ley de Mediación Familiar de las Islas Baleares; al comprender el desarrollo de la Mediación Familiar desde la perspectiva de la materialización de un contrato se entiende aquí como una de las partes a quien media y, por la otra, a la llamada «parte familiar», en la que se cuenta con la existencia de una variedad de sujetos. Cada una de tales partes tienen unas determinadas obligaciones recogidas en la ley en artículos diferentes.

A la hora de valorar lo que aporta, pues, la Ley madrileña se debe de subrayar el adecuado modo de señalar tanto quienes son los potenciales sujetos de la mediación como quienes no deben de contar con tal tipo de solución; en este sentido ya la Ley catalana aludía a «las personas legitimadas para instar la mediación familiar» (art. 5).

En el caso madrileño se alude en el art. 8.1 a diferentes posibilidades que nos llevan desde lo más cotidiano —las personas unidas por vínculo matrimonial— hasta casos tales como el de «las personas con menores a cargo no incluidas en los apartados anteriores en los conflictos que surjan con respecto a los menores o para prevenir o simplificar un litigio judicial en el ámbito del derecho de familia».

Tiene, también, una especial importancia el hecho de que se excluyen de la mediación «... los conflictos que a juicio del mediador o profesional competente, deban ser abordados desde otras formas de intervención o tratamiento, ya sea psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra índole» (art. 8.2).

## 2.3. El mediador. La formación de los mediadores

### 2.3.1. *El mediador*

Se entiende en la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid al mediador como «un profesional especializado, imparcial y neutral...» (art. 11). Ha de tener una determinada cualificación (art. 12) y cuenta con unos determinados derechos (art. 13) y deberes (art. 14), pudiéndose abstener si existiesen unas determinadas causas (art. 14).

Cabe valorar la figura del mediador en la Comunidad de Madrid como muy similar a la que previamente se regula en Cataluña (art. 7) y Galicia (art. 5)

dado que se canaliza, únicamente, la mediación familiar a través de un mediador, claramente individualizado, desde cada una de sus respectivas leyes.

En el caso valenciano se tienen en cuenta tanto las entidades de mediación familiar (art. 6) como a las personas mediadoras (art. 7). Esta misma fórmula se sigue en Canarias (arts. 5 y 6, modificados en los artículos 4 y 5 de la Ley de 2005). En Castilla-La Mancha, a la hora de considerar a las personas y entidades mediadoras, se reseña con anterioridad a las «Administraciones Públicas a través de las personas vinculadas a las mismas que presten servicios en puestos de trabajo entre cuyas funciones figure la mediación familiar...», y a «las entidades públicas o privadas que se inscriban en el Registro...», con relación a «las personas mediadoras en el libre ejercicio de la profesión...» (art. 6), lo que supone un entendimiento de la mediación familiar otorgándole formalmente prioridad a lo que tiene de servicio público. En todo caso, desde el criterio de esta Comunidad, es ésta una actividad que «podrá ser desarrollada por una o varias personas mediadoras...» (art. 16).

En Castilla y León se distingue entre los mediadores familiares —con sus derechos (art. 9), deberes (art. 10) y causas de abstención (art. 11)— y los equipos de personas mediadoras (art. 12), que se proponen, en el texto legal, «con el fin de fomentar la colaboración interdisciplinar entre los profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de éstos en cada procedimiento concreto de mediación».

La Ley balear distingue, a los efectos del ejercicio de la mediación familiar, entre personas mediadoras (art. 29) y centros de mediación (art. 30) que tienen unas determinadas obligaciones estipuladas por ley (art. 31).

No obstante el hecho de que una ley como la de la Comunidad de Madrid centre exclusivamente la mediación en la persona mediadora no obsta para que quien medie lo pueda hacer desde su implicación en una determinada entidad de mediación familiar. Y es que el hecho de que no se concrete la existencia de la entidad mediadora en el texto de la ley no significa, en ningún caso, que se excluya la posibilidad de su existencia.

### 2.3.2. *La formación de los mediadores*

Esta ley de la Comunidad de Madrid no exige, en lo que a titulación se refiere, un perfil académico determinado para quien se dedique a la mediación familiar. Lo único que se requiere es «un título universitario de grado superior o medio con validez en territorio español» y que acrediten «las acciones formativas teórico-prácticas específicas de mediación, en los términos que reglamentariamente se determine» (art. 12).

En Cataluña se exige a nivel de perfil profesional que sea «una persona que ejerza de abogado, de psicólogo, de trabajador social, de educador social o de pedagogo y que esté colegiada en el colegio profesional respectivo» (art. 7.1).

La Ley gallega remite al reglamento correspondiente a la hora de especificar la experiencia profesional de quien pretenda mediar, señalándose, en este caso que «serán expertos en actuaciones psico-socio-familiares» (art. 5).

La Ley valenciana contempla la posibilidad de que «se establezca la titulación específica que habilite para desempeñar tal actividad». Ante la falta de dicha titulación se considera que debe de tener «formación universitaria en las disciplinas de Derecho, Psicología o Trabajo Social, Educación Social o Graduado Social». Asimismo se considera la posibilidad de que se dediquen a la mediación «otros licenciados universitarios superiores, siempre que acrediten previamente el aprovechamiento de una formación universitaria específica de postgrado, mínima de especialista» (art. 7).

La Ley canaria, a la hora de establecer la formación del mediador familiar, parte del reconocimiento de la salvedad de «que otra disposición legal superior establezca lo contrario». De no ser así habrá de tener titulación universitaria «en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social u otras Ciencias Sociales» (art. 4 Ley 3/2005).

El ejercicio de la Mediación familiar en Castilla-La Mancha se contempla tanto incluido en el ámbito de aplicación de la ley correspondiente como fuera de la misma dado que se reconoce explícitamente la posibilidad de que exista una «mediación familiar realizada por las personas mediadoras en el libre ejercicio de su profesión y que no se hallen inscritas en el Registro de Personas y Entidades Mediadoras de Castilla-La Mancha» [art. 2.3.b)]. Asimismo, en Castilla-La Mancha, al igual que en la Comunidad Valenciana, se plantea la posibilidad de que pueda establecerse una titulación específica. En tanto la ley exige la posesión de un título de licenciatura «en Derecho, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía o Sociología, o de la Diplomatura en Trabajo Social o en Educación Social...» [art. 6.c)].

En Castilla y León se requiere tener un título universitario «en Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social, y en cualquier otra Licenciatura o Diplomatura de carácter social, educativo, psicológico, jurídico o sanitario» (art. 8).

En las Islas Baleares los mediadores han de ser «personas licenciadas o diplomadas en derecho, psicología, pedagogía, trabajo social o educación social...» (art. 29).

La adquisición de la condición de mediador se vincula en Cataluña a la formación específica que se acredite al respecto. En Cataluña se contempla en el art. 7.2, lo que se concretará por vía reglamentaria. Lo mismo sucede en Galicia (art. 5).

En Valencia asimismo se valora la posibilidad de que cuente, para poder inscribirse en el Registro de personas mediadoras familiares, con «una formación universitaria específica de postgrado en los distintos niveles de experto, especialista o máster». Lo mismo sucede en Canarias (art. 4 Ley 3/2005).

En Castilla La Mancha han de estar, «en su caso», incorporados «como ejercientes en el respectivo colegio profesional», siempre que lo exija la normativa reguladora y, estar inscritos en el Registro correspondiente. No se solicita, en este caso, pues, una formación específica complementaria a una titulación (art. 6).

En Castilla y León para ejercer como mediador familiar el interesado ha de tener las autorizaciones debidas y la acreditación de una formación espe-

cífica «por un mínimo de trescientas horas impartidas, organizadas o tuteladas por Instituciones Universitarias o Colegios profesionales» (art. 8).

Asimismo en las Islas Baleares se exige que se acredite «el aprovechamiento de una formación en materia de mediación familiar que establezca y homologue el Gobierno de las Illes Balears mediante el desarrollo reglamentario» (art. 29.1).

El tratamiento de la formación del mediador por vía reglamentaria se ha concretado tanto en Cataluña como en Galicia. En el caso catalán la formación específica ha de ser «impartida por los colegios profesionales o por centros universitarios debidamente homologada por el Centro consistente en cursos de una duración mínima de 200 horas y un requisito mínimo del 80 por 100 de asistencia. Estos cursos deben de tener el contenido que se apruebe por orden de la persona titular del Departamento de Justicia, y tienen que abarcar conocimientos jurídico-económicos, psicosociales y sobre técnicas de mediación y sobre mediación familiar» (art. 12.1)<sup>14</sup>. Dicha orden señalará «las materias de las que quedan exentas las personas solicitantes por razón de la titulación que las habilita para la respectiva profesión» (art. 12.2). La orden en cuestión propone un programa de mediación especializada estructurado en los bloques señalados reglamentariamente<sup>15</sup>.

La regulación de la figura del mediador familiar en Galicia fija los siguientes requisitos para la habilitación que permita la inscripción el Registro de Mediadores Familiares. En primer lugar, una titulación «en derecho, psicología, pedagogía, psicopedagogía, trabajo social o en educación social». En segundo término, la acreditación de «al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de habilitación para la inscripción, actividades profesionales en el campo psico-socio-familiar». Y, además, contar con las licencias pertinentes y, estar inscrito, en su caso, en el colegio profesional propio de su titulación<sup>16</sup>.

Se parte, de este modo, de opciones diferentes a la hora de reglamentar la formación. Se puede apostar, como en Cataluña, por una enseñanza reglada o dejar la formación del mediador familiar basada en la acumulación de experiencias a partir del criterio de la dedicación a tal tarea durante un tiempo determinado.

En cualquier caso la profesionalización de la mediación familiar ha de tender, con el paso del tiempo, a la concreción de un perfil profesional basado en una formación propia.

<sup>14</sup> Departamento de Justicia. Reglamento de la Ley 1/2001, de 15 de marzo, de mediación familiar de Cataluña, recogido como anexo en el Decreto 139/2002, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento... *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 3641, 23, 5, 2002, pp. 9143 y ss.

<sup>15</sup> Departamento de Justicia. Orden 237/2002, de 3 de julio, por la que se regulan el contenido y el procedimiento de homologación de los cursos de formación específica en materia de mediación, *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 3673, 9 de julio de 2002, 9, pp. 12361 y ss.

<sup>16</sup> Consellería de Familia, Juventud y Voluntariado. Decreto 159/2003, de 31 de enero, que regula la figura del mediador familiar, el Registro de Mediadores Familiares de Galicia y el reconocimiento de la mediación gratuita, *Diario Oficial de Galicia*, núm. 34, de 18 de febrero del 2003, pp. 1819 y ss.



El hecho de que la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid proponga un perfil de mediador que pueda provenir de ámbitos de formación muy variados es consecuente, en cierto modo, con esa tendencia que existe, en general, en España a que la cuestión no está tanto en el punto de partida formativo de quien va a ejercer esta función como en que cuente, posteriormente, con una formación complementaria suficiente que tienda a garantizar el adecuado funcionamiento de la parte mediadora.

#### **2.4. El Registro de Mediadores Familiares y la Comisión Autonómica de Mediación Familiar**

Esta Ley de la Comunidad de Madrid —a través de la Consejería competente, en materia de familia— reserva, como es habitual, a la Administración Autonómica una serie de competencias en relación con la mediación familiar, con independencia de que se deje pendiente, a una disposición de carácter reglamentario, el órgano que ha de responsabilizarse de las funciones a asumir (art. 5), que ha de ser «la Dirección general competente en materia de familia...», según se manifiesta al tratar sobre el Registro de Mediadores Familiares (art. 6).

En el artículo 5, se señalan, entre otras competencias, la de «Gestionar el Registro de mediadores familiares» y la de «Presidir la Comisión Autonómica de Mediación Familiar».

Por lo que se refiere a la gestión del Registro de Mediadores en la Comunidad de Madrid Ley le otorga a los colegios profesionales que tienen que ver con la mediación familiar un papel de colaboradores en la gestión de dicho registro, concediéndoles la posibilidad de crear «registros auxiliares». Se sigue así una parecida línea de acción a la desarrollada en las Comunidades de Cataluña (art. 23) y Valencia (art. 12). En tanto en Galicia, Canarias, Castilla y León e Islas Baleares no se le ofrece, en las leyes correspondientes, papel alguno a los colegios profesionales, lo que supone que las distintas comunidades autónomas optan por un modelo de gestión exclusiva del registro en cuestión.

La cuestión no es menor. En un caso como el de Castilla-La Mancha, a la hora de referirse a quien ha de estar registrado, se alude a «personas y entidades públicas o privadas que deseen ejercer actividades de mediación familiar como servicio social especializado....» (art. 27), lo que supone la contemplación de una varia formulación de dicha mediación, más allá del modelo del mediador estrictamente individual,

También en Castilla y León se apuesta por la posibilidad de una manera de practicar la mediación en la que quepa el trabajo en equipo, lo que lleva a generar una determinada sección, en el registro correspondiente, al respecto (art. 18).

En las Islas Baleares, sin dejar de optar por una dependencia única del Servicio de Mediación de las Islas Baleares, se crean dos Registros distintos; por eso se alude en este caso, de forma diferenciada, a la creación del Registro de

Mediadores y del Registro de Centros de Mediación de Colegios Profesionales y de Entidades Públicas o Privadas (art. 32).

Lo que podemos entender como modelo de mediación familiar compartida, en el que cabe entender la posición elegida por la Comunidad de Madrid, supone apostar por la búsqueda de un cierto papel coordinador de la Administración Autonómica en el desarrollo de la mediación familiar. Ello se plasma, básicamente, en este caso, en la creación de la Comisión Autonómica de Mediación Familiar que vendrá a ser una especie de punto de encuentro en el que además de la deseable coordinación se asuma desde la misma el papel asesor pertinente, ensamblando en su seno a representantes de «la Administración, los colegios profesionales y otras instituciones implicadas en la mediación familiar» (art. 7).

Nada tiene que ver la existencia de esta Comisión con lo que supone, tanto en Cataluña (art. 3) como en la Comunidad de Valencia (art. 1), el Centro de Mediación Familiar, ya que se trata de órganos específicos para esta materia pero en clave exclusivamente de administración autonómica. Lo mismo puede decirse de las Islas Baleares, en donde se crea, mediante su Ley de Mediación Familiar, el Servicio de Mediación Familiar de las Islas Baleares (arts. 25-28).

En las demás Comunidades Autónomas que han legislado al respecto, no se define de un modo tan estricto lo que ha de entenderse como los servicios —y las funciones de los mismos— propios de la Administración en esta materia; se alude, en la Ley canaria a la Consejería competente (art. 22), y se señalan una serie de atribuciones al respecto en los casos de Castilla-La Mancha (art. 8) y Castilla y León (art. 5).

Así pues lo que nos aporta el texto madrileño en esta materia es la concreción de una Comisión de naturaleza sustancialmente distinta a la de los demás órganos hasta ahora existentes siendo, entre todas las opciones hasta ahora planteadas, la que ofrece un instrumento de carácter más dialogante entre lo que es la administración propiamente dicha y aquellas instancias de carácter público o privado que puedan hacer labores en materia de mediación familiar.

### III. LA APLICACIÓN DE LA LEY

#### 3.1. La cuestión territorial

La Ley madrileña «regula las actuaciones de mediación familiar profesional que se realicen en el ámbito de la Comunidad de Madrid por las personas mediadoras que reúnan los requisitos marcados por esta Ley», excluyéndose de su aplicación, «las actuaciones realizadas en condiciones distintas a las previstas en esta Ley» (art. 2).

En las primeras leyes de mediación familiar acordadas por parte de Comunidades Autónomas —concretamente, en Cataluña y Galicia— la cuestión del ámbito de aplicación no se trata expresamente en sus respecti-

vos articulados. En Cataluña, en el preámbulo, se dice al respecto que su finalidad es «institucionalizar, potenciar y extender a toda Cataluña la mediación, que encaja perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico». En Galicia se considera, únicamente, en este sentido —y, también, desde la parte inicial de la Ley—, la conveniencia de regularla «en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia».

Esta cuestión ya se trata de forma expresa en un artículo de la Ley valenciana, incluyendo en el ámbito de aplicación, de la misma tanto «las actuaciones profesionales de mediación familiar que se desarrollen total o parcialmente en el ámbito de la Comunidad Valenciana», como «Las personas mediadoras familiares y las entidades públicas o privadas que actúen profesionalmente en el ámbito de la mediación familiar y cuyas actuaciones se realicen totalmente en el territorio de la Comunidad Valenciana» (art. 2).

En Canarias, la Ley considera «la regulación de la actividad de la mediación familiar, que se desarrolle total o parcialmente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Canaria, por personas físicas o jurídicas, acreditadas conforme al procedimiento que en la misma se regula» (art. 1). En Castilla-La Mancha se asume, al igual que en Canarias, la mediación familiar total o parcialmente desarrollada en su territorio pero, además, se dispone que «podrán acogerse a la mediación familiar regulada en la presente Ley las personas que habiendo residido ambas en Castilla-La Mancha, se encuentren en una situación de conflicto familiar, siempre que, al menos, una de ellas esté empadronada o tenga su residencia habitual en la misma» (art. 2). La ley castellano-manchega es la única aprobada hasta la fecha que hace mención expresa a la mediación familiar internacional, «entendiendo por tal aquella que presenta un elemento personal de extranjería, se rige por las prescripciones de esta Ley» (art. 5).

La ley de Castilla y León trata esta cuestión de forma muy sucinta señalando que «Es objeto de la presente Ley regular la mediación familiar que se desarrolle en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León» (art. 1). En tanto en las Islas Baleares se señala que «El ámbito de esta ley es territorial y afecta a las actuaciones de mediación familiar que se lleven a cabo en las Illes Balears con la participación de un mediador inscrito en el Registro de Mediadores de las Illes Balears» (art. 3).

Es indudable que la cuestión territorial, a la hora de aplicar una ley de rango autonómico que se ocupe de una cuestión tal como la mediación familiar —en la que puede darse el caso de que las partes puedan residir en comunidades autónomas diferentes o incluso fuera de España—, se puede orientar de formas muy variadas, tal como cabe valorar a la hora de reconocer las posiciones de los distintos Parlamentos que han legislado en este sentido.

El vincular la aplicación de la Ley a las «actuaciones de mediación familiar profesional que se realicen en el ámbito de la Comunidad de Madrid» supone, en este caso, partir de que es la figura del mediador la que posiciona, en dicha Comunidad, tal actividad mediadora, con independencia del origen o residencia de las partes que quieran asumir lo que esta Ley les aporta, y que no excluye, por otra parte, la posible existencia de una actividad mediadora

familiar, en la propia Comunidad de Madrid, ajena a la aplicación de esta Ley, actividad que, en principio, se haría a espaldas de esa profesionalización que el tipo de actuación contemplada por dicha Ley supone.

### 3.2. La promoción de la mediación familiar

El hecho de que ya en el preámbulo de la Ley se reconozca que la Comunidad de Madrid tiene atribuida «la competencia exclusiva en materia de servicios sociales» conlleva el papel promotor que asume en una cuestión tal como la mediación familiar.

La creación de una Comisión de Mediación Familiar, desde la propia ley —art. 7—, en la que están integrados «la Administración, los colegios profesionales y otras instituciones implicadas en mediación familiar», conlleva, por otra parte, el reconocimiento de que estamos ante un ámbito de acción compartida, en el que es deseable coordinar líneas de acción.

Aún cuando la redacción del artículo correspondiente cite a la Administración, en general —lo cual supone que puede ser tanto del Gobierno Central, Autonómico o Local—, a la hora de especificar quienes formarán parte de la misma se alude, únicamente, a «representantes de la Consejería competente en materia de familia», siendo presidida la Comisión en cuestión, también, por un representante de dicha administración autonómica [art. 5.g)].

La Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid, al referirse a las competencias que tiene la administración autonómica en esta materia, señala, en primer lugar, el «promover la figura de la mediación como sistema positivo de resolución de conflictos familiares, así como la formación de mediadores» [art. 5.a)].

La aprobación de las acciones formativas de la persona mediadora y la acreditación de la validez de la formación precisa, así como la gestión del Registros de Mediadores, supone, igualmente, una implicación activa, por parte de la Administración autonómica, en la labor de los mediadores que se completa con el ejercicio de la potestad sancionadora sobre los mismos.

Por otra parte esta Ley fomenta facilitar a los interesados la mediación familiar, lo cual viene derivado de la propia ordenación de la materia que supone tanto esta ley como la reglamentación derivada de la misma.

No se contempla pues, en el caso madrileño, desde el texto de la Ley en cuestión, ni la organización de este ámbito social a través de un Centro de Mediación Familiar —como sucede en Cataluña (art. 2.1 y 2), Valencia (art. 1.2) e Islas Baleares (art. 25)— ni los supuestos de gratuidad de la mediación previstos en distintas Comunidades autónomas —Cataluña (art. 9), Galicia (art. 9), Valencia (art. 6.2), Canarias (art. 21), Castilla-La Mancha (art. 9), Castilla y León (art. 13) e Islas Baleares (art. 28)—.

La decisión de no incluir en el contexto de la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid aspectos de índole organizativa y de generación de servicios —en lo que a la administración autonómica se refiere—, ni cuestiones de estricto carácter asistencial —como es la posible gratuidad

en la mediación familiar—, no quiere decir que no sean tenidos en cuenta por parte de la Administración madrileña. Y es que el Plan de Apoyo a la familia 2005-2008, citado en el preámbulo de esta Ley, es el marco organizativo en el que caben todas estas líneas de acción no reguladas por esta Ley.

### 3.3. El Procedimiento de la Mediación Familiar

En la Comunidad de Madrid, como es mayoritario en la legislación autonómica anterior —Cataluña (art. 16), Galicia (art. 12), Canarias (art. 10), Castilla-La Mancha (art. 16.1), Castilla y León (art. 15), Islas Baleares (art. 4)<sup>17</sup>—, las partes han de estar de acuerdo para que se inicie el procedimiento (art. 16.1) y también han de designar, comúnmente —Cataluña (art. 16.2), Galicia (art. 12.1), Valencia (art. 14.1), Canarias (art. 11), Castilla-La Mancha (art. 16.2), Castilla y León (art. 15), Islas Baleares (art. 6)—, a la persona mediadora «entre los inscritos en el Registro de Mediadores Familiares» (art. 17), criterio igualmente semejante en la generalidad de la normativa autonómica anterior —Cataluña (arts. 3 y 4), Galicia (art. 12.2), Valencia (art. 12), Canarias (art. 23), Castilla-La Mancha [art. 10.g], Castilla y León (art. 15), Islas Baleares (art. 29)—.

La primera entrevista que el mediador ha de hacer reuniendo a las partes —en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid— tiene un carácter informativo y han de acordarse en ella los objetivos a acometer, señalándose cuales son los asuntos de la mediación y, «previsiblemente», el número de sesiones necesarias (art. 18.1).

No se especifica en la Ley madrileña en qué consiste la información que ha de dar el mediador a las partes en esta reunión inicial. La Ley catalana señala al respecto que se «les ha de explicitar el procedimiento y el alcance de la mediación; en especial les ha de informar del derecho de cualquiera de ellas de dar por acabada la mediación y del mismo derecho que tiene la persona mediadora... La persona mediadora ha de informar a las partes de la conveniencia de recibir asesoramiento jurídico durante la mediación y de la necesidad de intervención letrada a fin de asesorar en la redacción del Convenio, si éste es procedente» (art. 17.1 y 2).

En la Ley valenciana se dispone, en este mismo sentido, que se han de explicar «los honorarios de la mediación»; además se acuerda que, «si por los presupuestos de partida no se ve viable la mediación, ésta no se iniciaría...» (art. 16). La Ley canaria también señala al mediador la obligación de informar, en esta reunión inicial, «a las partes de sus derechos y deberes, así como de los derechos y deberes del mediador... de las personas que van a intervenir como consultores» (art. 12).

Entre las cuestiones que ha de informar el mediador en Castilla-La Mancha figura «la necesidad de que las partes asistan personalmente a las

<sup>17</sup> En Valencia «La mediación familiar se iniciará a solicitud de cualquiera o de ambas de las partes en conflicto» (art. 13).

sesiones de mediación» [art. 18.e)], cuestión en la que el texto castellano manchego se reitera dado que, en su art. 19, trata del carácter personalísimo de este procedimiento.

En la ley de Castilla-La Mancha se dedica un artículo —el 17— a la prohibición de inicio del procedimiento, señalándose que «el mediador no podrá iniciar el procedimiento de mediación familiar cuando tenga constancia de la existencia de malos tratos a los hijos menores o al otro miembro de la pareja».

Abundando en la oportunidad, o no, de acometer un procedimiento de mediación familiar, en Castilla y León, en la primera reunión, «se analizará la pertinencia o no de la mediación familiar, y si lo estima oportuno, enseñará a las partes el documento de compromiso de sometimiento a la mediación familiar... (art. 16.1).

Por lo que se refiere a la exigencia de la existencia de un acta inicial se dispone la misma en la totalidad de las leyes autonómicas acordadas hasta la fecha —Cataluña (art. 18), Galicia (art. 13.4), Valencia (art. 17), Canarias (art. 12), Castilla-La Mancha (art. 18.3), Castilla y León (art. 16), Islas Baleares (art. 9) (en este caso se le otorga forma de contrato), Comunidad de Madrid (art. 18.1) y Principado de Asturias (art. 12)—.

En la Ley catalana se exige que en ella «se expresa la fecha, la voluntariedad de la participación de las partes y la aceptación de los deberes de confidencialidad... En la medida en que sea posible, se identifica el objeto de la mediación y el número de sesiones previstas. El acta se firma por triplicado...» (art. 18).

En la Ley de Castilla y León, se le encarga al mediador, con respecto a esta acta inicial, que, «comprobada su plena capacidad de obrar, recabará de ellas la firma voluntaria del compromiso y, en caso afirmativo, se iniciará el correspondiente procedimiento de mediación» (art. 16.1).

En el caso balear esa acta inicial se concreta con la forma de un contrato que se atiene a unos contenidos fijados por la propia ley (art. 9.1).

La Ley madrileña estima que la duración de la mediación no debe de exceder de tres meses, a partir de la sesión inicial, que se pueden prorrogar otros tres, siempre y cuando lo estime pertinente el mediador (art. 18.2). Ya en Cataluña se plantea una duración de semejantes características (art. 20); lo mismo sucede en Galicia (art. 14.1), Canarias (art. 13), Castilla-La Mancha (art. 20) y Castilla y León (art. 16.2). En Valencia también se considera como tiempo máximo de duración tres meses pero, en este caso, la prórroga no puede superar los dos meses (art. 18). En tanto las Islas Baleares, si bien contemplan los tres meses como plazo máximo para realizar el procedimiento de mediación, acuerda, así mismo, que «La persona mediadora y las partes podrán acordar, si así lo consideran adecuado, la prórroga del citado plazo por el tiempo que la persona mediadora considere necesario en relación con la expectativa del acuerdo existente» (art. 10).

En el caso de la Ley de Mediación familiar de la Comunidad de Madrid, además de esta propia ley, se reconoce que se salvaguarda la confidencialidad tanto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal como por la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. No tienen la calificación de confidenciales ni los datos no personalizados ni los «indicios de comportamientos que supongan una amenaza para la integridad física o psíquica de una persona» [art. 18.3.b)].

No se expresa en la Ley de Mediación familiar de la Comunidad de Madrid el modo en que se han de desarrollar las reuniones siguientes. En la Ley gallega se contempla, en este sentido, como por desacuerdo de las partes con la persona mediadora, pueden cambiar de mediador y como «de cada una de las sesiones se elaborará un informe, haciendo mención del lugar y fecha de su celebración y de las circunstancias en que ha discurrido la misma, con indicación particular de las incidencias surgidas en su desarrollo» (art. 13.4). En Castilla y León también se exige que exista de cada sesión un justificante «en el que es hará constar la fecha, duración, lugar y personas participantes...» (art. 16.3).

Todas las leyes autonómicas de mediación familiar tienen, también, un punto común en el hecho de contemplar de forma específica la finalización del procedimiento —Cataluña (art. 21), Galicia (art. 15), Valencia (art. 19), Canarias (art. 14). Su párrafo primero es modificado en (art. 7, Ley 3/2005), Castilla-La Mancha (art. 22), Castilla y León (art. 17.2), Islas Baleares (arts. 19 y 20)—. A este respecto la Ley de Madrid dispone que «al finalizar el procedimiento, el mediador redactará el documento con los acuerdos alcanzados. En el caso de no existir acuerdos, se hará constar este extremo» (art. 19.1).

En lo que a la concreción de acuerdos se refiere es particularmente resaltable lo que se dispone en la ley balear para la que «si los sujetos de la parte en conflicto llegan a un acuerdo parcial, pueden formalizarlo en cualquier momento sin esperar la resolución de las demás cuestiones pendientes, siempre que sean divisibles jurídicamente» (art. 22).

El texto madrileño recoge, así mismo, que «La terminación del procedimiento de mediación puede producirse por decisión de cualquiera de las partes en conflicto o por el mediador...» (art. 19.2). Tal precisión tiene un antecedente concreto en el caso de Castilla y León (art. 17.1).

Así pues, como es habitual, la Ley madrileña —en el ámbito autonómico y en lo que se refiere al procedimiento—, opta por una redacción sucinta en relación con otros textos precedentes que aportan un mayor número de orientaciones. Debe de subrayarse, en todo caso, el especial énfasis con que se trata el principio de confidencialidad a la hora desarrollar la mediación familiar.

### 3.4. Infracciones y sanciones

La Ley madrileña de mediación familiar entiende que las infracciones a sancionar son las «cometidas por los mediadores familiares» (art. 21). Teniendo en cuenta esta circunstancia se sigue aquí un modo de operar semejante al contemplado anteriormente en Cataluña (art. 26), Galicia (art. 19), Canarias (art. 15) y Castilla y León (art. 21).

La Ley valenciana se había orientado en un camino diferente, en este sentido, al distinguir entre entidades de mediación familiar y personas mediadoras, pormenorizándose, en este caso, de forma diferenciada las infracciones. También Castilla-La Mancha entiende que son sancionables además de las personas mediadoras —entendidas como sujetos infractores (art. 29)— las entidades de mediación familiar (art. 28), pero, sin considerar a éstas específicamente en el marco propio de la ley en cuestión, sino que incluyendo tal cuestión en el marco de otra ley: la Ley 5/1997, que regula el sistema de servicios sociales en esta Comunidad. Igualmente en la Ley de las Islas Baleares se tratan de forma diferente, en lo que infracciones y sanciones se refiere, la persona mediadora y los centros de mediación familiar.

A la hora de tipificar las infracciones se sigue, en la Comunidad de Madrid, la ordenación creciente en relación con su relevancia —leve (art. 22), grave (art. 23), muy grave (art. 24)—, al igual que se hace en la ley catalana (art. 29), valenciana (art. 27), castellano-manchega (art. 31) y de las Islas Baleares (art. 35). Lo hacen, en cambio, de forma decreciente las leyes gallega (arts. 21, 22 y 23), canaria (arts. 17, 18 y 19), y de Castilla y León (arts. 23, 24 y 25).

Son, en la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid, doce las cuestiones integradas, en este caso, como infracciones —tres, leves; tres, graves; seis, muy graves—; dos de éstas tienen que ver con la reincidencia. En el supuesto de que tal reincidencia sea de infracciones leves se estará ante una de carácter grave; si se trata de reincidencias tipificables como graves nos encontraremos ante una infracción muy grave.

Debe de tenerse en cuenta que existe una gran diversidad, entre las distintas Comunidades autónomas, a la hora de enumerar las infracciones. Se tiende, sin embargo —y en general—, a hacer un especial hincapié en las que se entienden como muy graves siendo, en este sentido, particularmente exhaustivo el texto de Castilla y León, en el que se reconocen trece supuestos.

No existe tampoco un criterio homogéneo en la valoración de la gravedad de las infracciones. Así, a modo de ejemplo, y en lo que tiene que ver con los honorarios a percibir por parte del mediador, tiene la tipificación de leve en Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares; de grave, en Cataluña, Castilla y León —donde también puede considerarse muy grave—, y de muy grave, en Madrid.

La ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid es la única —hasta el momento de su publicación— que dedica, además, un artículo específico a la reincidencia, entendiendo como reincidente a quien «haya sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de otra infracción de las previstas en esta Ley en el plazo de dos años a contar desde el mismo día de su notificación» (art. 25). No obstante, en todas las demás leyes autonómicas de esta materia, se considera siempre la reiteración: en Cataluña se entiende como grave «la reiteración de una infracción leve en el plazo de un año»; y como muy grave, «la reiteración de una infracción grave en el plazo de dos años» (art. 28). En Galicia y Canarias se entiende como muy grave cometer tres faltas graves al año (arts. 21



y 17 respectivamente); y como grave, tres faltas leves, igualmente en el año (arts. 22 y 18 respectivamente).

En Valencia y Castilla y León se tiene en cuenta la reiteración entre las circunstancias que gradúan las sanciones (arts. 30 y 27 respectivamente). En Castilla-La Mancha se entiende como grave «la comisión de dos o más infracciones leves distintas, en un plazo de tres años, siempre que haya sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa» [art. 31.3.f)]. La valoración de muy graves, por vía de la reiteración, supone «la comisión de tres o más infracciones graves distintas, en un plazo de tres años, siempre que haya sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa» [art. 31.4.d)]. Así pues —y en lo que tiene que ver con la reincidencia—, el texto madrileño puede considerarse, entre los publicados hasta el momento, como el más exigente al respecto.

Los tipos de sanciones son, así mismo, objeto de tratamiento en las diferentes leyes autonómicas hasta ahora publicadas.

La infracción leve, en Madrid, puede sancionarse bien con amonestación por escrito, bien con suspensión temporal de hasta un mes [art. 26.1.a)]. En Cataluña solo se castiga con amonestación por escrito [art. 29.a)]; lo mismo sucede en Galicia [art. 24.c)]; en Valencia [art. 28.a)]; en Canarias [art. 20.c)]; en Castilla y León [art. 26.1.c)], y en Baleares [art. 36.a)]. En el caso castellano-manchego la infracción leve también puede ser sancionada o bien con una amonestación por escrito, o bien con «multa de hasta tres mil cinco euros con seis céntimos» [art. 32.1.a).b)].

La infracción grave se castiga en Madrid con suspensión temporal «por un período de un mes y un día, hasta un año» [art. 26.1.b)]. Es similar a lo que se acordó ya en Cataluña [art. 29.b)]. En tanto, en Galicia la suspensión es de un día a seis meses [art. 24.b)]; en Valencia, entre seis meses y un año [art. 28.b)]; en Canarias, de un día a un año [art. 20.b)], al igual que en Castilla y León [art. 26.1.b)] e Islas Baleares [art. 36.b)]; en Castilla La Mancha se puede sancionar con: «a) suspensión de financiación pública por un plazo máximo de tres años, b) suspensión temporal para ejercer como mediador por un período de un mes a un año, c) multa de tres mil cinco euros con siete céntimos hasta quince mil veinticinco euros con treinta céntimos, acumulada, en su caso, a la suspensión temporal» (art. 32.2).

La infracción muy grave tiene en Madrid una sanción que puede ser la suspensión temporal por un período de un año y un día a dos años, o la baja definitiva en el Registro de Mediadores Familiares [art. 26 1.c)]. Esa doble opción estaba ya prevista en la Ley catalana, pudiendo tener el período de suspensión hasta tres años [art. 29.c)]; lo mismo sucede en la Ley valenciana [art. 28.c)]. En Galicia se distingue entre una serie de supuestos que conllevan la baja definitiva en el Registro de mediadores y otros que derivan en suspensión temporal por un período de seis meses y un día a un año [art. 24.a)]. La Ley canaria castiga con la baja definitiva este tipo de falta (art. 20). En Castilla La Mancha la sanción puede ser de diverso tipo: «a) suspensión de la financiación pública por un plazo de tres años y un día a seis años; b) suspensión temporal para ejercer como mediador por un período de un año y un

día a tres años, *c)* baja definitiva en el Registro de Personas y Entidades Mediadoras de Castilla-La Mancha, y *d)* multa desde quince mil veinticinco euros con treinta y un céntimos a seiscientos un mil doce euros con diez céntimos, acumulada, en su caso, a la suspensión temporal o la baja definitiva» (art. 32.3). En Castilla y León la suspensión temporal puede llegar a quince años; la multa se reserva para un supuesto muy concreto: para quienes ejercen la mediación familiar sin estar inscritos en el pertinente registro [art. 26.1.a)].

La Ley madrileña obliga a que aquellas «sanciones que adquieran firmeza en vía administrativa se consignarán en el Registro de Mediadores familiares» (art. 26.2), al igual que se dispuso, anteriormente, en Castilla y León (art. 26.2). En la Ley canaria esta cuestión resulta todavía mas estricta ya que todas las sanciones serán registradas «donde el infractor se encuentre inscrito, debiéndose igualmente a sus respectivos colegios profesionales» (art. 20). También se registran todas las sanciones en Castilla-La Mancha (art. 32.4).

La graduación de las sanciones se trata en el art. 27 de la Ley de Mediación familiar de la Comunidad de Madrid. También se considera una graduación de sanciones en las leyes valenciana (art. 30), y de Castilla-La Mancha (art. 33), Castilla y León (art. 27) e Islas Baleares (art. 37). El grado de intencionalidad, la gravedad del riesgo, el incumplimiento, el número de afectados, el perjuicio a menores y personas dependientes modulan, en líneas generales, dicha graduación.

En cuanto al procedimiento sancionador la ley de mediación familiar de la Comunidad de Madrid considera, de forma diferenciada, la competencia (art. 28) y el procedimiento, propiamente dicho (art. 29). En cuanto a la competencia se entiende que la instrucción del expediente correspondiente la puede acometer de forma indiferente la Administración autonómica o el colegio profesional correspondiente; sucede lo mismo en Valencia (art. 29). En tanto, en Cataluña el órgano sancionador es el colegio profesional al que pertenece la persona mediadora (art. 30). Por el contrario, en Galicia se ocupa de la cuestión la Administración autonómica; lo mismo acaece en Canarias (art. 22), Castilla-La Mancha (art. 30), Castilla y León (art. 30), y en las Islas Baleares (art. 33).

Dada la doble opción señalada, en lo que a la competencia se refiere, el procedimiento puede vincularse a la los dictados propios de la Administración, o bien a las normas estatutarias del colegio profesional en cuestión. En el caso de la Comunidad de Madrid, y dependiendo de quien instruya el expediente en cuestión, se aplicará una u otra normativa (art. 29).

#### IV. VALORACIÓN FINAL

1. La Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid responde a la necesidad de organizar debidamente la aplicación de la misma, integrándose, en lo que tiene que ver con esta Comunidad Autónoma, como una medida más al Plan de apo-

- yo a la familia 2005-2008, aprobado por el Consejo de Gobierno el 1 de diciembre de 2005.
2. Sus antecedentes están —como en las demás leyes autonómicas sobre esta materia acordadas hasta la fecha— en la Recomendación de 21 de enero de 1998 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en la que se delimitan los principios a partir de los cuales se orienta la Mediación Familiar. Dichos principios también orientarán el proyecto de Ley sobre mediación familiar que se contempla en la Disposición Final 3.ª de la Ley 15/2005, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio.
  3. La regulación de la figura del mediador profesional orienta el desarrollo de esta ley que tiene como ámbito de aplicación, precisamente, «las actuaciones de mediación profesional que se realicen en el ámbito de la Comunidad de Madrid por las personas mediadoras que reúnan los requisitos marcados por esta Ley».
  4. A diferencia de otras leyes de rango autonómico sobre esta materia no se consideran en la misma ni las cuestiones organizativas propias de la Comunidad Autónoma, en relación con este asunto, ni los supuestos de gratuidad a la hora de ser aplicada. Tampoco se valora, expresamente, el hecho de que el mediador pueda formar parte de un grupo interdisciplinar.
  5. La creación de la Comisión Autonómica de Mediación Familiar, contemplada en su artículo 7, ha de entenderse como un muy significativo exponente de la pretensión de generar un órgano de asesoramiento y coordinación que relacione a la Administración autonómica con «los colegios profesionales y otras instituciones implicadas en mediación familiar».
  6. La existencia, en la Comunidad de Madrid, del Plan de apoyo a la familia 2005-2008 y la futura reglamentación prevista por esta Ley han de entenderse, con el debido carácter de complementariedad, con respecto a la misma.